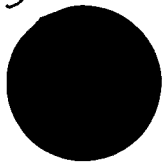


F011
(042)
3



MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Dr. Julio R. Rajneri

CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL NUEVO TRATADO
DE EXTRADICION CON ESPAÑA

3 de marzo de 1987

BUENOS AIRES — REPUBLICA ARGENTINA

1 9 8 7

Foll
(042)

5

ENTRADA	
FECHA	28/5/97
LIBRO	BIB
CLASIFICACION	A

INV	008175
SIG	Foll 042
LIB	5 / ej 2

DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Dr. Julio R. Rajneri

CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL NUEVO TRATADO
DE EXTRADICION CON ESPAÑA

(Ej 2) 1174

CENTRO
DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA
Paraguay 2667 - Tel. Pab - Buenos Aires - Rep. Argentina



El Ministro de Educación y Justicia, doctor Julio Raúl Rajneri, durante el discurso.

los cambios y los cambios son en general, otros verdaderos
textos y libros, al estado actual de la ciencia, cada vez
un mayor número de libros, y otros, para la continuidad

Señor embajador, señor secretario de Justicia, señoras y señores:

Resulta particularmente grata la visita del señor ministro de Justicia del reino de España, doctor D. Fernando Ledesma Bartet, a nuestro país, y con todo gusto le doy una cordial bienvenida a este ministerio, con ocasión de la firma del tratado de extradición que nos reúne hoy aquí.

Las relaciones entre España y la Argentina, han constituido siempre relaciones privilegiadas de dos países vinculados estrecha y entrañablemente por su idioma, por sus hábitos y tradiciones y —también— por su permanente amor a la libertad.

La mutua cooperación en materia penal no podía escapar a esas reglas comunes, y el tratado de extradición con España, que aún nos rige, ha cumplido ya un siglo, pues fue firmado en Buenos Aires el 7 de mayo de 1881.

Ese tratado receptó el sistema de listado limitativo de delitos que habría de permitir la extradición. Tal limitación motivó un canje de notas, celebrado en Madrid el 17 de febrero de 1935, que incluyó la “estafa” en aquel listado, y que fuera aprobado por la Argentina recién en agosto de 1984.

Un siglo es —por cierto— más que suficiente para considerarse necesario rever las condiciones y las disposiciones que regulan esta actividad entre ambos países.

Aunque el derecho penal mantiene cierta inmutabilidad en sus normas, y los cambios son, en general, obras sedimentarias, lentas y laboriosas, el mundo moderno se enfrenta, cada vez con mayor frecuencia, a nuevos desafíos de la criminalidad.

Es probable que la realidad del mundo actual sea el más grande problema para la ciencia penal, en cuanto a la influencia que las comunicaciones y la interrelación entre los países trae para las diversas manifestaciones y formas delictivas.

Algunos de los delitos más conspicuos y difíciles del mundo moderno, se refieren y están vinculados con la actividad internacional, es decir, la internacionalización de la criminalidad tiene manifestaciones salientes como el contrabando de drogas y de armas, los delitos económicos y el terrorismo.

Aunque resulte paradójal, a tal situación no es ajena la modernidad, y sus nuevas formas —originadas en avances específicos de la sociedad, ya sean de naturaleza tecnológica como los abusos delictivos en los campos económicos, financiero, de la computación y de la biogenética, y el abuso de poder por parte de empresas multinacionales—, constituyen aspectos sobresalientes de las sociedades modernas. El derecho positivo, entonces, requiere nuevas disposiciones. Los actuales tratados de extradición que forman parte del conjunto de normas destinadas a hacer menos fácil la tarea de quebrantar la ley, se hallan desactualizados, y precisan, en muchos casos, no solamente una acción bilateral, sino también formas multilaterales que aseguren la cooperación internacional en todos los ámbitos para lograr resultados positivos.

Hay que partir del supuesto de que en esta materia la existencia de fronteras no constituye un impedimento para la acción de los grupos criminales, esa característica deriva de las circunstancias que se refieren al carácter de las comunicaciones, la universalidad de los delitos, el prodigioso medio de contagio constituido por los medios masivos de información, y la calidad y el carácter de organización que ofrecen algunas de las más peligrosas y lucrativas formas del crimen organizado.

Se trata, en síntesis, de responder con métodos y mecanismos modernos a la acción de quienes están mejor organi-

zados e informados que en el pasado, y que pueden aprovechar rápidamente las ventajas relativas que ofrecen las diferencias existentes entre los distintos países, circulando, a la vez, libremente al amparo de las mayores facilidades con que se realiza el movimiento de personas en el mundo moderno.

En la Argentina, la creencia de que los métodos jurídico-institucionales eran insuficientes para combatir los modernos caminos elegidos por la delincuencia, arrojó al país a la cénaga del terrorismo de estado, que consideró prioritario destruirlos sin preocupación alguna por el destino de la sociedad.

Tal creencia se fundó en suponer que el debido proceso legal o la existencia del "hábeas corpus"; en una palabra, el sistema jurídico en que se nutre la tradición de occidente, sería fácilmente burlado por organizaciones cuya capacidad de imaginación desborda los límites tradicionales del delito común.

La experiencia demuestra que ese apartamiento de las mejores tradiciones del mundo civilizado destruye, junto con el terrorismo, a la sociedad que se pretende defender.

Por ello, el derecho para ajustarse a estas nuevas exigencias, requiere la adaptación de sus normas, la flexibilización de sus procedimientos y una permanente adecuación en busca de la mayor eficacia represiva, para evitar, precisamente, que sus mecanismos sean desestimados por parecer ineficaces frente a las necesidades de responder a determinados tipos de agresión.

Así, este nuevo tratado de extradición se inserta dentro de los mecanismos que habrán de garantizar un funcionamiento más eficiente de la justicia, y una preservación más amplia y dinámica de la sociedad ante el nuevo embate del delito.

El nuevo tratado perfecciona el existente, no sólo porque da mejores soluciones a las cuestiones que puede plantear,

una solicitud de extradición, sino también porque resuelve aspectos no previstos en el interior.

Entre las nuevas normas que se incorporan al tratado que hoy se firma, merecen citarse:

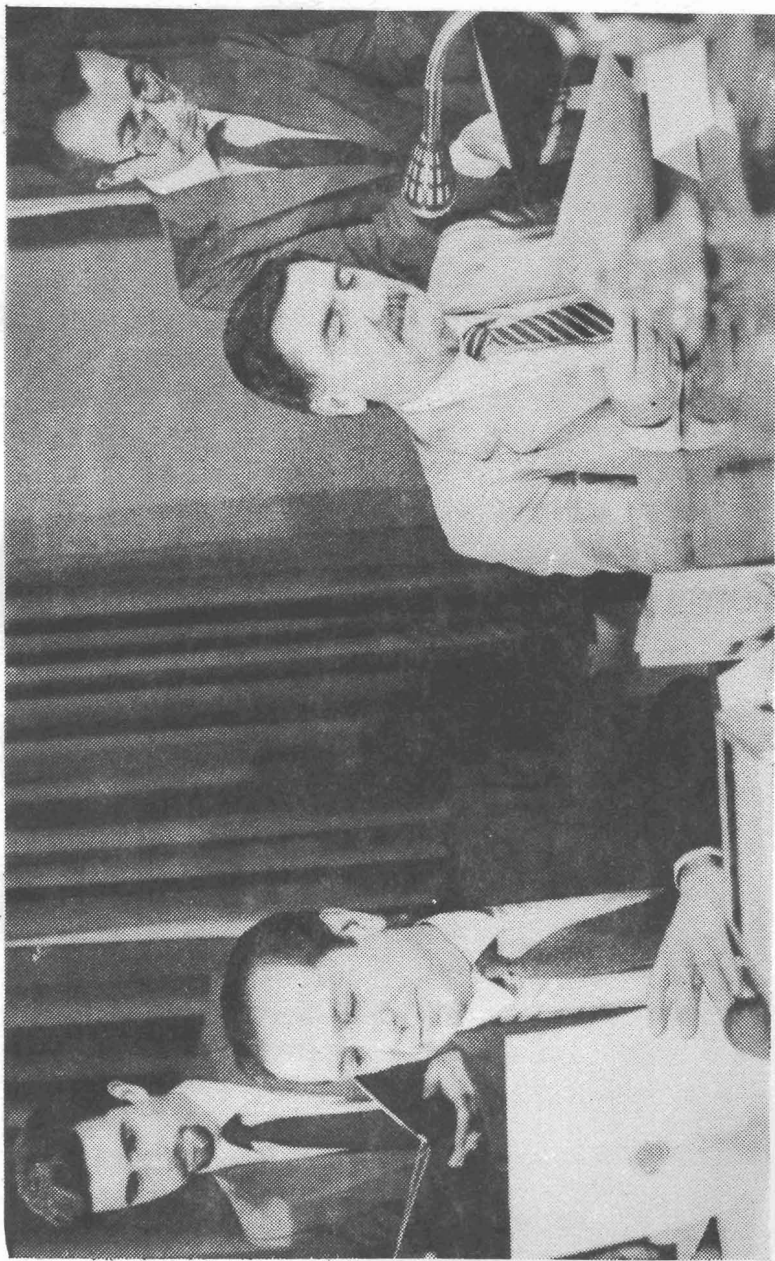
- Se abandona el listado cerrado de delitos extraditables. De ahora en más serán extraditables todos los delitos con pena máxima superior a un año.
- Permite la extradición por delitos impositivos, aduaneros y cambiarios.
- Se excluye a los actos de terrorismo del concepto de delito político.
- Permite la extradición simplificada por voluntad del reclamo.
- Permite la postergación del traslado del extraditado, tanto por razones de salud, cuanto por motivos humanitarios.
- Reglamenta claramente la tramitación de la detención preventiva.
- Permite la intervención del país requirente en el trámite judicial de extradición con legitimación procesal.
- Además de la extradición, el tratado se refiere a la asistencia judicial en material penal entre ambos países.
- También sobre este tópico, el nuevo tratado mejora sustancialmente el anterior, reglamentando las condiciones y procedimientos que deben cumplirse para aquella asistencia, a saber:
 - Transmisión y entrega de objetos y documentos.
 - Notificaciones.
 - Citaciones.
 - Recepción de declaraciones.
 - Comunicación de antecedentes.
 - Envío y recepción de denuncias.

Tal es, justamente, el fin fundamental del tratado por firmarse al establecer un sistema moderno de extradición, pero al mismo tiempo, un nuevo nivel de cooperación entre la Argentina y España, que esperamos sea el inicio de una serie

gentina y España, que esperamos sea el inicio de una serie sucesiva de adaptaciones convergentes tendientes a lograr el perfeccionamiento de los sistemas jurídicos que vinculan a ambas naciones.

Ministro Ledesma, le invito a que firmemos el tratado de extradición entre España y la Argentina.

Muchas gracias.



El doctor Rajneri y el Ministro de Justicia de España, doctor Fernando Ledesma Bartet, firmando el Tratado de Extradición.

TRATADO DE EXTRADICION
Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
EL REINO DE ESPAÑA

TRATADO DE EXTRADICION
Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIAL PENAL
entre
LA REPUBLICA ARGENTINA
y
EL REINO DE ESPAÑA

La República Argentina y el Reino de España,
Conscientes de los profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones y deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación en todas las áreas de interés común y entre ellas las de cooperación judicial.

Han resuelto concluir un Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal en los siguientes términos:

TITULO I

EXTRADICION

ARTICULO 1º

Las partes contratantes se obligan a entregarse mutuamente, según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad que consista en privación de libertad.

ARTICULO 2º

1. — Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de

libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año.

2. — Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá además que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta cumplir no sea inferior a seis meses.

3. — Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de ellos los requisitos de los párrafos 1 y 2, la Parte requerida podrá conceder también la extradición por estos últimos.

ARTICULO 3º

También darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Parte.

ARTICULO 4º

1. — En materia de tasas e impuestos, de aduanas y de cambio la extradición se concederá, con arreglo a las disposiciones de este Tratado, si los hechos reúnen los requisitos del artículo 2º.

2. — La extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación de la Parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos o de tasas o no contenga el mismo tipo de reglamentación en estas materias que la legislación de la Parte requirente.

ARTICULO 5º

1. — No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo calificará por sí como un delito de carácter político.

A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos:

- a) El atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de Gobierno, o de un miembro de su familia.

b) Los actos de terrorismo.

c) Los crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de la humanidad.

2. — Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella puede ser agravada por esos motivos.

ARTICULO 6º

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

ARTICULO 7º

1. — Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiere sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquélla.

2. — Si la Parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la Parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15.

Se informará a la Parte requirente del resultado que hubiere obtenido su solicitud.

ARTICULO 8º

Nada de lo dispuesto en el presente Tratado podrá ser interpretado como limitación del asilo, cuando éste proceda. En consecuencia, la Parte requerida también podrá rehusar la concesión de la extradición de un asilado de acuerdo a su propia ley.

En caso de no accederse a la extradición, por este motivo, será de aplicación lo previsto en el párrafo 2 del artículo anterior.

ARTICULO 9º

No se concederá la extradición:

- a) Cuando de conformidad a la ley de la Parte requirente ésta no tuviere competencia para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.
- b) Cuando la persona reclamada hubiera sido condenada o debiera ser juzgada por un tribunal de excepción o "ad-hoc" en la Parte requirente.
- c) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las Partes se hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición.
- d) Cuando la persona reclamada hubiera sido condenada la Parte requerida por el hecho que motivó la solicitud de extradición.

ARTICULO 10

No se concederá la extradición cuando los hechos que la originan estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o expongan al reclamado a tratos inhumanos o degradantes.

Sin embargo, la extradición puede ser concedida, si la Parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad o de que no será sujeta al cumplimiento de penas atentatorias a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

ARTICULO 11

La extradición podrá ser denegada:

- a) Cuando fueren competentes los Tribunales de la Parte requerida, conforme a su propia ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición. Podrá, no obstante, accederse a la extradición si la Parte reque-

rida hubiese decidido o decidiese no iniciar proceso o poner fin al que se estuviese tramitando.

- b) Cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio de la Parte requirente y la ley de la Parte requerida no autorizare la persecución de un delito de la misma especie cometido fuera de su territorio.
- c) Cuando la persona reclamada fuere menor de dieciocho años en el momento de presentarse la solicitud de extradición, tuviere arraigo en la Parte requerida y ésta considerare que la extradición puede perjudicar su inserción social, sin perjuicio de que se adopten las medidas más apropiadas que prevea la ley de la Parte requerida.

ARTICULO 12

1. — Si el reclamado hubiese sido condenado en rebeldía, no se concederá la extradición si la Parte requirente no da seguridades de que será oído en defensa y podrá utilizar los recursos legales pertinentes.

2. — Concedida la extradición, la Parte requirente podrá ejecutar la sentencia si el condenado consintiere expresamente.

ARTICULO 13

1. — Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización a la Parte requerida. Esta podrá exigir a la Parte requirente la presentación de los documentos previstos en el artículo 15.

La autorización podrá concederse aún cuando no se cumpliera con las condiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2º.

2. — No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada diere su expreso consentimiento o, habiendo tenido la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue entregada, permaneciere en él más de treinta días o regresare a él después de abandonarlo.

ARTICULO 14

Cuando la calificación del hecho imputado se modificare durante el procedimiento, la persona entregada no será perseguida o sentenciada sino en la medida en que los elementos constitutivos del delito que corresponda a la nueva calificación hubieran permitido la extradición.

ARTICULO 15

1. — La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía diplomática. Sin embargo, cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

2. — A la solicitud de extradición deberá acompañarse:

- a) Copia o transcripción de la sentencia condenatoria, o del auto de procesamiento, prisión o resolución análoga según la legislación de la Parte requirente, con relación sumaria de los hechos, lugar y fecha en que ocurrieron y, en caso de sentencia condenatoria, certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, indicándose el tiempo que faltare por cumplir.
- b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y huellas dactilares.
- c) Copia o transcripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también los referentes a la prescripción de la acción y de la pena o medida de seguridad.
- d) Las seguridades sobre la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere el artículo 10, cuando fuere necesario.

ARTICULO 16

1. — Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida lo comunicará lo más pronto posible a la Parte requirente, la que deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hubieran observado dentro del plazo que fije la Parte requerida.

2. — Si por circunstancias especiales le Parte requirente no pudiere cumplir dentro de ese plazo, podrá solicitar a la Parte requerida que éste sea prorrogado.

ARTICULO 17

La Parte requerida podrá conceder la extradición sin cumplir con las formalidades que establece este Tratado, si la persona reclamada, con asistencia letrada, prestare su expresa conformidad después de haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento de extradición y de la protección que éste le brinda.

ARTICULO 18

1. — La Parte requerida comunicará a la Parte requirente, por la vía del artículo 15, su decisión respecto de la extradición.

2. — Toda negativa, total o parcial, será motivada.

3. — Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para llevar a efecto la entrega del reclamado, que deberá producirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días contados desde la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

4. — Si la persona reclamada no fuere recibida dentro de dicho plazo, será puesta en libertad y la Parte requirente no podrá reproducir la solicitud por el mismo hecho.

5. — Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se entregarán a la Parte requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser puestos igualmente a su disposición.

ARTICULO 19

1. — Si la persona reclamada se encontrare sometida a procedimiento o condena penales en la Parte requerida, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extinguidas esas responsabilidades en dicha Parte, o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con la Parte requirente.

2. — Cuando el traslado pusiere seriamente en peligro la vida o la salud de la persona reclamada, la entrega podrá ser postergada hasta que desaparezca tal circunstancia.

3. — También se podrá aplazar la entrega del reclamado cuando circunstancias excepcionales de carácter personal y suficientemente serias la hicieren incompatible con razones humanitarias.

ARTICULO 20

Negada la extradición por razones que no sean meros defectos formales, la Parte requirente no podrá efectuar a la Parte requerida una nueva solicitud de extradición por el mismo hecho.

ARTICULO 21

1. — La extradición en tránsito por el territorio de una de las Partes se otorgará previa presentación por la vía del artículo 15 de una solicitud, acompañada de una copia de la comunicación, juntamente con una copia de la solicitud original de extradición, siempre que no se opongan motivos de orden público. Las Partes podrán rehusar el tránsito de sus nacionales.

Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del reclamado.

La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito los gastos que éste realice con tal motivo.

2. — No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto algún aterrizaje en el territorio del Estado de tránsito.

ARTICULO 22

La reextradición a un tercer Estado no será otorgada sin el consentimiento de la Parte que hubiere concedido la extradición, salvo en el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 13.

A tal efecto deberá efectuarse una nueva solicitud de extradición con todos los requisitos establecidos en este Tratado.

ARTICULO 23

1. — Si la extradición de una misma persona hubiera sido solicitada por varios Estados, la Parte requerida determinará a cuál de esos Estados entregará el reclamado y notificará su decisión a la Parte requirente.

2. — Cuando las solicitudes se refieran al mismo delito la Parte requerida deberá dar preferencia a la solicitud del Estado en cuyo territorio se cometió el delito, salvo que existan circunstancias particulares que recomienden otra cosa.

Las circunstancias particulares que podrán tenerse en cuenta incluyen la nacionalidad y el domicilio habitual de la persona reclamada y las fechas de las respectivas solicitudes.

3. — Cuando las solicitudes se efectúen por distintos delitos, la Parte requerida dará preferencia a la que se refiera al delito considerado más grave conforme a sus leyes, salvo que las circunstancias particulares del caso recomienden otra cosa.

ARTICULO 24

1. — En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.

2. — La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de alguna de las resoluciones previstas en el párrafo 2 del artículo 15 y hará constar la intención de cursar seguidamente una solicitud de extradición. Mencionará, asimismo, el delito por el cual se solicitará, el tiempo y lugar de la comisión de aquél y en la medida de lo posible la filiación de la persona reclamada.

3. — La solicitud de detención preventiva se remitirá en forma postal, telegráfica o cualquier otra que deje constancia escrita, por la vía del artículo 15 o por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal.

4. — La Parte requerida informará a la Parte requirente de las resoluciones adoptadas y especialmente y con carácter urgente, de la detención y del plazo dentro del cual deberá presentarse la solicitud de extradición.

5. — La autoridad competente de la Parte requerida podrá acordar la libertad del detenido adoptando las medidas pertinentes para evitar la fuga. En todo caso se decretará la libertad, si en el plazo de cuarenta días desde la detención, no se hubiese recibido la solicitud de extradición.

6. — Si la persona reclamada fuere puesta en libertad por cumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, la Parte requirente no podrá solicitar nuevamente la detención de la persona reclamada sin presentar la solicitud formal de extradición.

7. — Cuando el procedimiento de extradición se iniciase mediante la solicitud prevista en el artículo 15, sin previa petición urgente de detención, ésta se llevará a efecto, así como su modificación, de conformidad con la ley de la Parte requerida.

ARTICULO 25

1. — A petición de la Parte requirente, la Parte requerida asegurará y entregará, en la medida en que lo permitiese su legislación, los documentos, bienes y otros objetos:

- a) que pudiesen servir de piezas de convicción, o
- b) que, procediendo del delito, hubiesen sido encontrados en el momento de la detención en poder de la persona reclamada o fueren descubiertos con posterioridad.

2. — La entrega de esos documentos, dinero u objetos se efectuará incluso en el caso de que la extradición ya concedida no pudiese tener lugar a consecuencia de la muerte o evasión de la persona reclamada.

3. — La Parte requerida podrá conservarlos temporalmente o entregarlos bajo condición de su restitución, si ellos fueron necesarios para la sustanciación de un proceso penal en trámite.

4. — En todo caso quedarán a salvo los derechos que la Parte requerida o terceros hubieran adquirido sobre los citados objetos. Si existieren tales derechos, los objetos serán restituidos lo antes posible y sin gastos a la Parte requerida.

ARTICULO 26

Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte requerida serán a cargo de ésta, salvo los gastos de transporte internacional de la persona reclamada, que serán a cargo de la Parte requirente.

ARTICULO 27

La Parte requirente podrá designar un representante oficial con legitimación para intervenir ante la autoridad judicial en el procedimiento de extradición. Dicho representante será citado en forma, para ser oído antes de la resolución judicial sobre la extradición.

TITULO II

ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

ARTICULO 28

1. — Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, según las disposiciones de este Tratado, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento compete a la Parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

2. — La asistencia podrá prestarse en interés de la justicia, aunque el hecho no sea punible según las leyes de la Parte requerida. No obstante, para la ejecución de medidas de aseguramiento de objetos o registros domiciliarios, será necesario que el hecho por el que se solicita la asistencia sea también considerado como delito por la legislación de la Parte requerida.

ARTICULO 29

La asistencia judicial podrá ser rehusada:

- a) Si la solicitud se refiere a delitos políticos o conexos con delitos de este tipo, a juicio de la Parte requerida. A estos efectos será de aplicación lo prescripto en el párrafo 1 del artículo 5º.
- b) Si la solicitud se refiere a delitos estrictamente militares.

ARTICULO 30

1. — La solicitud de asistencia revestirá la forma de carta o comisión rogatoria.

2. — El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo conforme a la legislación de la Parte requerida y se limitará a las diligencias expresamente solicitadas.

3. — Cuando una solicitud de asistencia no pudiese ser cumplida, la Parte requerida la devolverá con explicación de la causa.

ARTICULO 31

Si la Parte requirente lo solicita expresamente será informada de la fecha y lugar de cumplimiento de la comisión rogatoria.

ARTICULO 32

La Parte requerida cumplimentará las comisiones rogatorias relativas a un procedimiento penal emanadas de las autoridades judiciales o del Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de instrucción o actos de comunicación.

ARTICULO 33

1. — Si la Comisión rogatoria tiene por objeto la transmisión de expedientes, elementos de prueba y, en general, cualquier clase de documento, la Parte requerida podrá entregar solamente copias o fotocopias autenticadas, salvo si la Parte requirente pide expresamente los originales.

2. — La Parte requerida podrá negarse al envío de objetos, expedientes o documentos originales que le hayan sido solicitados si su legislación no lo permitiera o si le son necesarios en un procedimiento penal en curso.

3. — Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una comisión rogatoria serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte requerida renuncie a ello.

ARTICULO 34

1. — Si la solicitud tuviere por finalidad la entrega de objetos o documentos, la Parte requerida procederá a la entrega de los objetos o documentos que le sean enviados a dicho fin por la Parte requirente.

2. — La entrega será realizada en alguna de las formas previstas por la legislación de la Parte requerida, y se acre-

ditará mediante recibo fechado y firmado por el destinatario o mediante certificación de la autoridad competente que acredite la diligencia. Uno u otro de estos documentos serán enviados a la Parte requirente y, si la entrega no ha podido realizarse se harán constar las causas.

3. — Si la solicitud tuviere por objeto la notificación de una decisión judicial, la notificación se efectuará en la forma que prevea la legislación procesal de la Parte requerida.

ARTICULO 35

1. — Cuando las autoridades judiciales o del Ministerio Público de una de las Partes estimaren especialmente necesaria la comparencia personal en su territorio de un inculpado, testigo o perito, lo harán constar expresamente en la resolución que disponga la citación

2. — La solicitud que tenga por objeto la citación de un inculpado, testigo o perito, ante las autoridades de la Parte requirente, podrá no ser diligenciada si es recibida dentro de los cuarenta y cinco días anteriores a la fecha señalada para la comparencia. La Parte requirente deberá tener en cuenta este plazo al formular la solicitud.

3. — La Parte requerida procederá a la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas por el caso de incomparencia.

4. — La solicitud deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas e indemnizaciones que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado.

ARTICULO 36

1. — El testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación comparezca ante las autoridades judiciales o del Ministerio Público de la Parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido o sometido a cualquier otra restricción de su libertad personal en esta Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida. Tampoco lo podrá ser el inculpado salvo por los hechos que constan en la citación.

2. — La inmunidad prevista en el precedente párrafo cesará cuando el inculpado, testigo o perito permaneciere voluntariamente más de treinta días en el territorio de la Parte requirente, después del momento en que su presencia ya no fuere exigida por las autoridades judiciales o del Ministerio Público de dicha Parte.

ARTICULO 37

Si la solicitud tuviere por objeto la declaración en la Parte requerida de un inculpado, testigo o perito, ésta procederá a su citación bajo las sanciones conminatorias que disponga su propia legislación.

ARTICULO 38

1. — Si la citación para declarar ante las autoridades de la Parte requirente se refiriera a una persona detenida o presa en el territorio de la Parte requerida, ésta sólo accederá a ella si el detenido prestare su consentimiento y siempre que la Parte requerida estime que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.

2. — La Parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado.

3. — Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo correrán por cuenta de la Parte requirente.

ARTICULO 39

1. — Cuando una de las Partes solicite de la otra los antecedentes penales de una persona, hará constar el motivo de la petición. Dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.

2. — Sin perjuicio de ello, las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra, con periodicidad anual.

ARTICULO 40

1. — Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

- a) Autoridad de la que emana la petición y naturaleza de su resolución.
- b) Delito a que se refiere el procedimiento.
- c) En la medida de lo posible, identidad y nacionalidad de la persona encausada o condenada.
- d) Descripción precisa de la asistencia que se solicite y toda la información que se estime útil para facilitar el efectivo cumplimiento de la solicitud.

2. — Las solicitudes de asistencia que tengan por objeto cualquier diligencia distinta de la simple entrega de objetos o documentos, contendrán también una sumaria exposición de los hechos y la acusación formulada, si la hubiere.

3. — Cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la Parte requerida, ésta la devolverá con explicación de la causa.

ARTICULO 41

1. — La solicitud de asistencia será transmitida por la vía diplomática. No obstante ello, las Partes podrán designar otras autoridades habilitadas para enviar o recibir tales solicitudes.

2. — Las Partes podrán encomendar a sus Cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legislación del Estado receptor.

ARTICULO 42

1. — Toda denuncia cursada por una Parte contratante cuyo objeto sea incoar un proceso ante los Tribunales de la otra Parte, se transmitirá por las vías previstas en el artículo anterior.

2. — La Parte requerida notificará a la Parte requirente el curso dado a la denuncia y remitirá en su momento una copia de la decisión dictada.

TITULO III

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 43

1. — No se requerirá legalización de las firmas de las autoridades y funcionarios de las Partes contratantes que obren en los documentos emitidos en aplicación de este Tratado.

2. — Cuando se acompañaren copias de documentos deberán presentarse certificadas por autoridad competente.

ARTICULO 44

1. — El presente Tratado está sujeto a ratificación. El canje de los instrumentos de ratificación tendrá lugar en la ciudad de Madrid.

2. — El Tratado entrará en vigor treinta días después de la fecha del canje de los instrumentos de ratificación y seguirá en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después de la fecha de recepción de la denuncia.

3. — Al entrar en vigor este Tratado, terminará el Tratado del 7 de mayo de 1881, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 de este artículo.

4. — Las extradiciones solicitadas después de la entrada en vigor de este Tratado se regirán por sus cláusulas, cualquiera sea la fecha de comisión del delito.

5. — Las extradiciones solicitadas antes de la entrada en vigor de este Tratado continuarán tramitándose conforme a las disposiciones del Tratado del 7 de mayo de 1881.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires a los tres días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Argentina

JULIO RAUL RAJNERI

Ministro de Educación y Justicia

Por el Reino de España

FERNANDO LEDESMA BARTET

Ministro de Justicia

